



Violencia y pobreza detonan los trastornos mentales

La falta de trabajo también impone fuertes cargas emocionales que terminan afectando a las personas.

Los actos violentos, la condición social y laboral de las personas y hasta la estructura familiar deben tenerse en cuenta al diseñar planes y políticas para mejorar la salud mental de los ciudadanos.

La recomendación es formulada por los autores de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM), que por primera vez da una mirada a aspectos como estos entre la población, que influyen en el desarrollo y consolidación de estos problemas de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que hay evidencia que relaciona el riesgo de enfermedad mental con indicadores de pobreza, que incluyen bajos niveles educativos, pobres condiciones habitacionales y bajos ingresos. Tras caracterizar a 13.355 hogares, los autores de la Encuesta encontraron, entre otros, los siguientes determinantes:

El 13,5 por ciento de la población está en pobreza extrema; al discriminar este dato se encontró que el 27,5 por ciento de los hogares rurales están en esta condición, al igual que el 9,2 por ciento de los urbanos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, liderado por Catherine DeCarlo y referenciado en distintos análisis sobre el tema, la pobreza involucra un conglomerado de acontecimientos estresantes de todo tipo, como tensiones económicas, conflictos familiares, cambios de lugar de residencia, menores oportunidades educativas y mayor riesgo de exposición a situaciones violentas y traumáticas.

Estrés frecuente

Todo esto hace, a juicio de la investigadora, que las personas sometidas a estas circunstancias tengan una continua exposición al estrés, que se relaciona con una mayor incidencia de depresión, ansiedad, adicciones y trastornos por estrés postraumático. Preocupa, indica el estudio, que los problemas de salud mental generados en la pobreza, implican una perpetuación de la misma.



Desempleo

Según la Encuesta, el 53,4 por ciento de las personas en edad productiva (18 a 44 años) no tiene ningún contrato de trabajo, lo mismo que el 72,1 por ciento de los mayores de 45. “La norma laboral en el país es el subempleo”, dicen los investigadores. Para la OMS, el desempleo y el trabajo sin condiciones dignas “son un disparador de síntomas y entidades psicopatológicas definidas, entre las que están la ansiedad, la depresión, los trastornos adaptativos, las adicciones, el deterioro de las relaciones familiares y el suicidio”. Estas condiciones no solo están ligadas al bajo ingreso, también a la dignidad y la autoestima.

Conflicto

El trastorno de estrés postraumático es la entidad más estudiada en el contexto de la vivencia de un trauma; tiene la misma definición y características en todas las edades.

Los autores de la Encuesta encontraron que el 9,2 por ciento de los niños de 7 a 11 años en Colombia tienen un riesgo elevado de padecerlo, por cuenta del maltrato físico, el abuso sexual y el ser testigos de violencia intrafamiliar o del entorno.

El estudio halló que en población de niños y adolescentes víctimas del desplazamiento por el conflicto, el 70 por ciento presenta algún problema psicológico que requiere ser atendido.

La prevalencia de estrés postraumático en esta misma población expuesta directamente al conflicto armado es del 47 por ciento.

Hogares rotos

El 31 por ciento de los niños de 7 a 11 años ha vivido con otro adulto que ha actuado como padre o como madre, y solo la mitad de todos los pequeños viven con sus padres biológicos.

Se ha demostrado que la primera fuente de ayuda y soporte de las personas, particularmente de los niños y adolescentes, son sus familias. Esto confiere a los hogares el papel de promotores de la salud mental; sin embargo, se ha demostrado en Colombia que también es una fuente generadora de trastornos mentales, cuando hay abandono, violencia intrafamiliar y desintegración, entre otros.



La familia: fuente de conflicto y a la vez soporte emocional

Uno de los objetivos de la encuesta era proporcionar pautas para redefinir la política de salud mental. De acuerdo con los autores, la evaluación de este aspecto de la población colombiana cobra más relevancia ante un eventual posconflicto.

A diferencia de otros trabajos, esta investigación no se enfocó solo en la enfermedad mental, sino en sus condicionantes, en la percepción y exposición a los factores que la generan.

La familia es uno de los aspectos de la investigación que más preocupan al Gobierno. Según el viceministro Fernando Ruiz, este es el núcleo más importante de soporte en materia emocional, más del 70 por ciento del apoyo se deriva de allí, aunque claramente es una fuente importante de conflicto. De hecho, la encuesta mostró que cerca del 30 por ciento de la población siente que su hogar tiene algún grado de disfuncionalidad.

Otra de las grandes inquietudes que deja el estudio, a juicio del Viceministro, es que “acumulamos muy pocas relaciones sociales, y ese escaso capital social lo tendemos a perder en la medida en que envejecemos. Después de los 60 años, más del 60 por ciento de la población queda sin ningún soporte de grupos sociales y las relaciones con la familia tienden a debilitarse”.

Ruiz dice que la foto deja claro que somos una sociedad impulsiva que cae rápidamente en la agresión, lo cual se incrementa con factores como que uno de cada tres colombianos ha sufrido condiciones de desarraigo o desplazamiento, debido a situaciones de violencia, tanto política como de delincuencia común.

“Estos resultados indican –afirma Ruiz– la importancia que en el eventual posconflicto tendrá la salud mental, y la necesidad de avanzar en modelos de atención a la población que incluyan el abordaje de la atención en salud mental desde lo social y los factores de riesgo de enfermedad mental”.

En materia de normativa, el país cuenta con la Ley 1616 del 2013, que garantiza el derecho a la salud mental y plantea la intervención integral de los factores que condicionan esta dimensión de la salud de las personas. Además existe el Plan Decenal de Salud Pública, que hace énfasis en la promoción de la convivencia y las relaciones interpersonales respetuosas.



Sala de Prensa

En ese orden de ideas, una de las recomendaciones hechas por la encuesta es el diseño de políticas de intervención temprana, que involucren a los sectores de salud y educación. También sugieren tener en cuenta a los grupos de la población que presentan mayor vulnerabilidad, como los jóvenes y las mujeres.

Diario El Tiempo, 20 de Septiembre de 2015. Página 3.